

ESPACIO CÍVICO PARA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICAS CLIMÁTICAS EN COLOMBIA (Actualización 2023)



Pie de Imprenta

© 2024 Independent Institute for Environmental Issues, Berlin

Editorial:
Unabhängiges Institut für Umweltfragen - UfU e.V.
Independent Institute for Environmental Issues

Contacto:
Greifswalder Str. 4 10405 Berlin, Alemania
Teléfono.: +49 (030) 428 49 93-0
Correo electrónico: mail@ufu.de
www.ufu.de

Equipo de investigación de Alemania
Independent Institute for Environmental Issues (UfU e.V.): Sarah Kovac, Fabian Stolpe, Larissa Donges, Franziska Sperfeld, Sophie Dolinga, Anne Nemack

Equipo de investigación colombiano
Lina Muñoz Ávila (Universidad del Rosario), Alejandra Cifuentes (Universidad Católica de Temuco)

Diseño:
Nicole Jaecke,
www.fija.de

Este estudio se ha realizado en el contexto del proyecto "Fortalecimiento de la Sociedad Civil para la Implementación de la Política Climática Nacional". El proyecto está coordinado por Amigos de la Tierra Alemania (Friends of the Earth Germany) en colaboración con el Instituto Independiente de Cuestiones Medioambientales (UfU e.V.), Censat - Agua Viva Colombia, Movimiento de los Verdes de Georgia (Greens Movement of Georgia) – Amigos de la Tierra Georgia (Friends of the Earth Georgia) y el Centro de Iniciativas Medioambientales "Ecoaction" Ucrania.

Duración del proyecto: 2018 - 2024
www.international-climate-initiative.com

Con el apoyo de:



Basado en una decisión del Bundestag alemán.

Citación:
Independent Institute for Environmental Issues (UfU e.V.), Lina Muñoz Ávila & Alejandra Cifuentes 2024: Civic space for participation in climate policies in Columbia. Berlin

Tabla de contenido

Pie de Imprenta	2
1 Resumen	4
2 Introducción	6
3 Metodología	7
4 Colombia - Retrato del país	9
4.1 Información general	9
4.2 Política climática nacional	10
5 El compromiso de la sociedad civil con el clima y su derecho a la participación	14
5.1 Requisitos fundamentales	14
5.2 Marco jurídico de la participación	15
5.3 Gobernanza y estructuras	18
5.4 En la práctica: procesos de participación	18
5.5 Creación de capacidad	20
6 Recomendaciones para reforzar la participación de la sociedad civil en la política climática y mejorar las futuras revisiones de las CND	22
7 Conclusión	24
Bibliografía	25
Apéndice	27

1Resumen

Este estudio analiza la situación de la participación de la sociedad civil en el contexto de las políticas climáticas en Colombia, partiendo del compromiso del país con acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú. Examina el espacio cívico disponible para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) colombianas comprometidas con cuestiones climáticas, teniendo en cuenta factores como el entorno social y político, los prerequisites legales y el marco institucional para la participación relacionada con el clima.

Las experiencias históricas de conflicto cívico y violencia en Colombia han dificultado la participación de la sociedad civil, incluidos los problemas de seguridad de los defensores del medio ambiente. Los altos niveles de corrupción erosionan aún más la confianza en las instituciones públicas, obstaculizando la participación efectiva de la sociedad civil. A pesar de estos retos, Colombia ha dado pasos significativos hacia el establecimiento de un marco legal para la participación ambiental, incluyendo la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú.

El marco jurídico de Colombia establece principios de participación democrática y exige la intervención pública en las decisiones que afectan a diversas cuestiones, incluidas las políticas medioambientales y climáticas. Colombia ha introducido mecanismos de participación como las consultas públicas, las encuestas y los diálogos, incluido el compromiso con las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. A pesar de estos esfuerzos, siguen existiendo retos, sobre todo en lo que respecta a la accesibilidad a los espacios de participación, especialmente en zonas remotas.

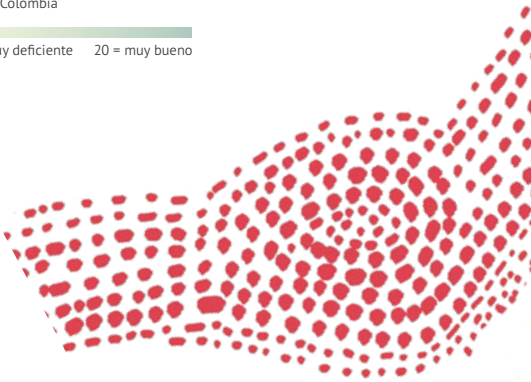
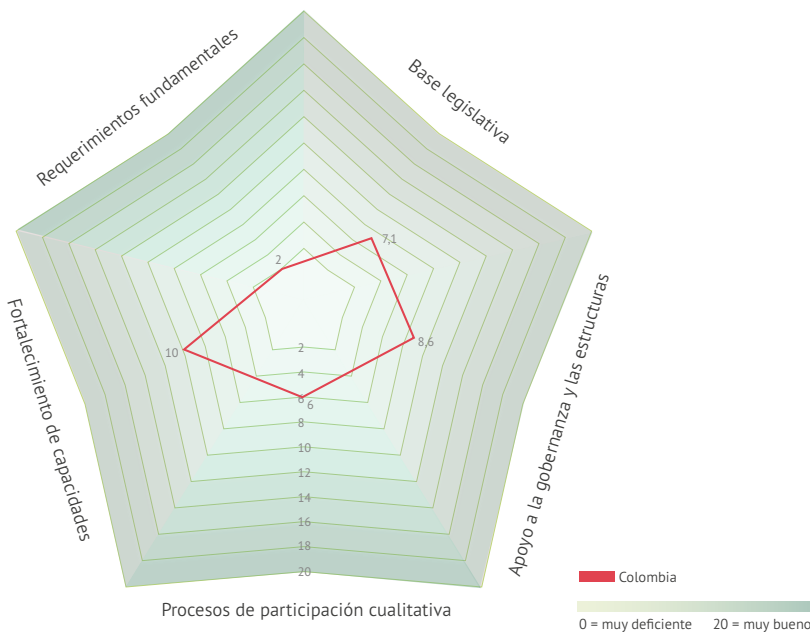
Políticas clave como la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) hacen hincapié en la participación pública en las acciones climáticas y los procesos de planificación. Sin embargo, en la práctica, la participación de la sociedad civil ha sido a menudo limitada, sobre todo en el desarrollo de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) del país. Para facilitar el diálogo con la sociedad civil, se creó el Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC), que actúa como órgano consultivo dentro de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC). Además, los Nodos Regionales de Cambio Climático desempeñan un papel crucial en el desarrollo y la aplicación de políticas climáticas a escala regional y local, incorporando la representación de la sociedad civil. Sin embargo, su limitado estatus legal afecta a su autonomía y a su capacidad para influir en las políticas nacionales. Por otra parte, el Gobierno colombiano se ha esforzado por desarrollar capacidades para la acción climática, ofreciendo herramientas y programas educativos para que las distintas partes interesadas aumenten la concienciación y los conocimientos sobre el cambio climático.

Tras el análisis de la situación de la participación de la sociedad civil en asuntos climáticos en Colombia, se procedió a su evaluación y a la identificación de sus deficiencias. Con base en ello, se desarrollaron las siguientes propuestas para mejorar la participación de la sociedad civil en Colombia:

- Colombia debe aplicar plenamente los requisitos del Acuerdo de Escazú en la legislación nacional para promover la coherencia política, la coordinación intersectorial y un enfoque equilibrado en la toma de decisiones sobre el medio ambiente y el clima.

- Para aumentar la legitimidad y el apoyo público, debería haber una participación más amplia y efectiva de la sociedad civil en la preparación de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCS) y los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT).
- Colombia debe garantizar la seguridad de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos permitiendo que expresen abiertamente sus preocupaciones y facilitándoles el acceso a los órganos judiciales y administrativos.

Figura 1: Evaluación del espacio cívico para la participación en políticas climáticas en Colombia (escalado a un máximo de 20 puntos por criterio)

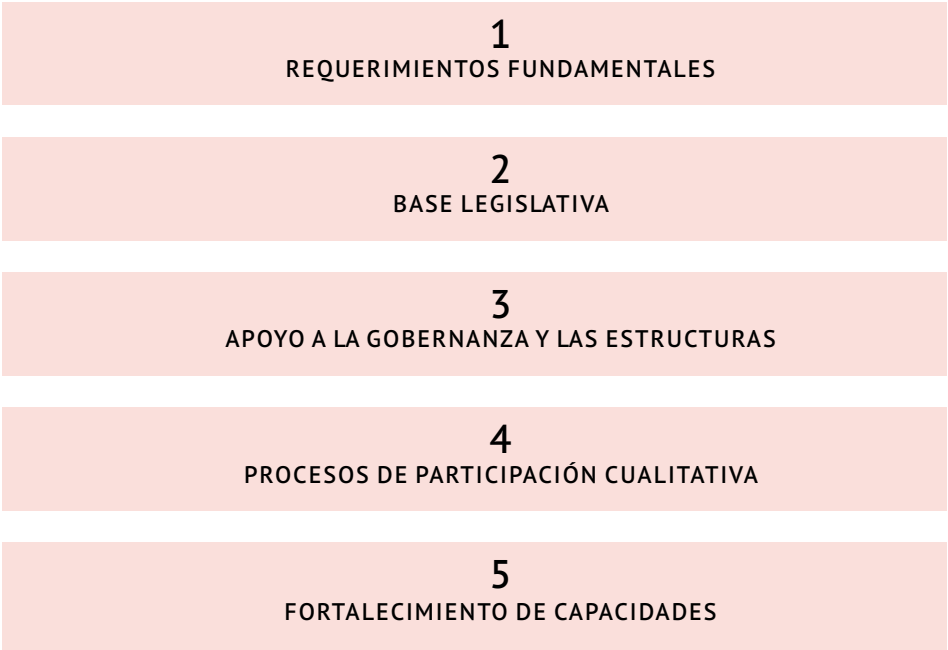


2 Introducción

A través de la ratificación del Acuerdo de París y la ratificación en curso del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), Colombia se ha comprometido a tomar medidas ambiciosas para mantener el aumento promedio de la temperatura global por debajo de 2°C por encima de los niveles preindustriales y a desarrollar y mantener estándares de participación de la sociedad civil en asuntos ambientales y climáticos. Este estudio trata ahora de dibujar un panorama realista de la situación actual de la participación de la sociedad civil en las políticas climáticas colombianas. Para ello, se analizó y evaluó el espacio cívico de participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) colombianas que trabajan en temas climáticos. Además, se investigaron el entorno social y político, los prerrequisitos legales para la participación y el activismo medioambientales, y las condiciones marco para la participación relacionada con el clima. Para ello, el estudio examina determinadas prácticas participativas, por ejemplo, en el marco de los procesos de elaboración de políticas relacionadas con la planificación y aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. La atención se centra aquí en los procesos participativos llevados a cabo por organismos estatales, agencias u OSC, en los que puede participar la sociedad civil. Sobre la base de este análisis del statu quo, se identificaron las barreras a la participación significativa, efectiva y a largo plazo de la sociedad civil en Colombia y se desarrollaron recomendaciones sobre cómo superarlas.

3 Metodología

El análisis del statu quo de la situación de la participación de la sociedad civil en los asuntos climáticos y el espacio cívico se llevó a cabo basándose en los conocimientos locales del equipo de investigación y en sus contactos y experiencias en el país. Incluyó revisión bibliográfica, análisis de la legislación y los documentos políticos pertinentes, así como entrevistas con expertos y partes interesadas locales. Para evaluar el espacio cívico de participación del país, se utilizó el concepto de "huella de participación" y su correspondiente esquema de evaluación normalizado¹. El esquema de evaluación comprende **5 criterios con 25 indicadores**.



Los indicadores tienen diferentes opciones de puntuación y un sistema de puntuación asociado, en el que algunos indicadores tienen mayor peso que otros. En total, puede alcanzarse una puntuación máxima de 59 puntos. Al escalonar cada criterio hasta un máximo de 20, los criterios se equilibran de manera uniforme. Para responder a las preguntas del esquema de evaluación, se recopiló información a través de grupos focales y entrevistas realizadas entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. Los expertos participantes, representantes de diferentes OSC, fueron seleccionados en función de sus experiencias con procesos de participación en el país.

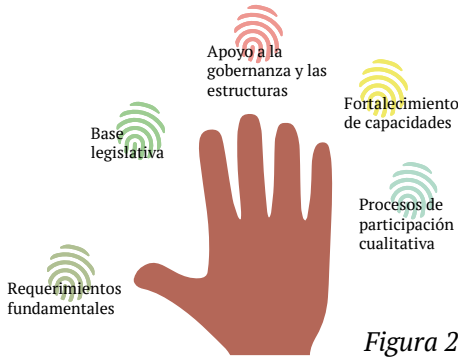
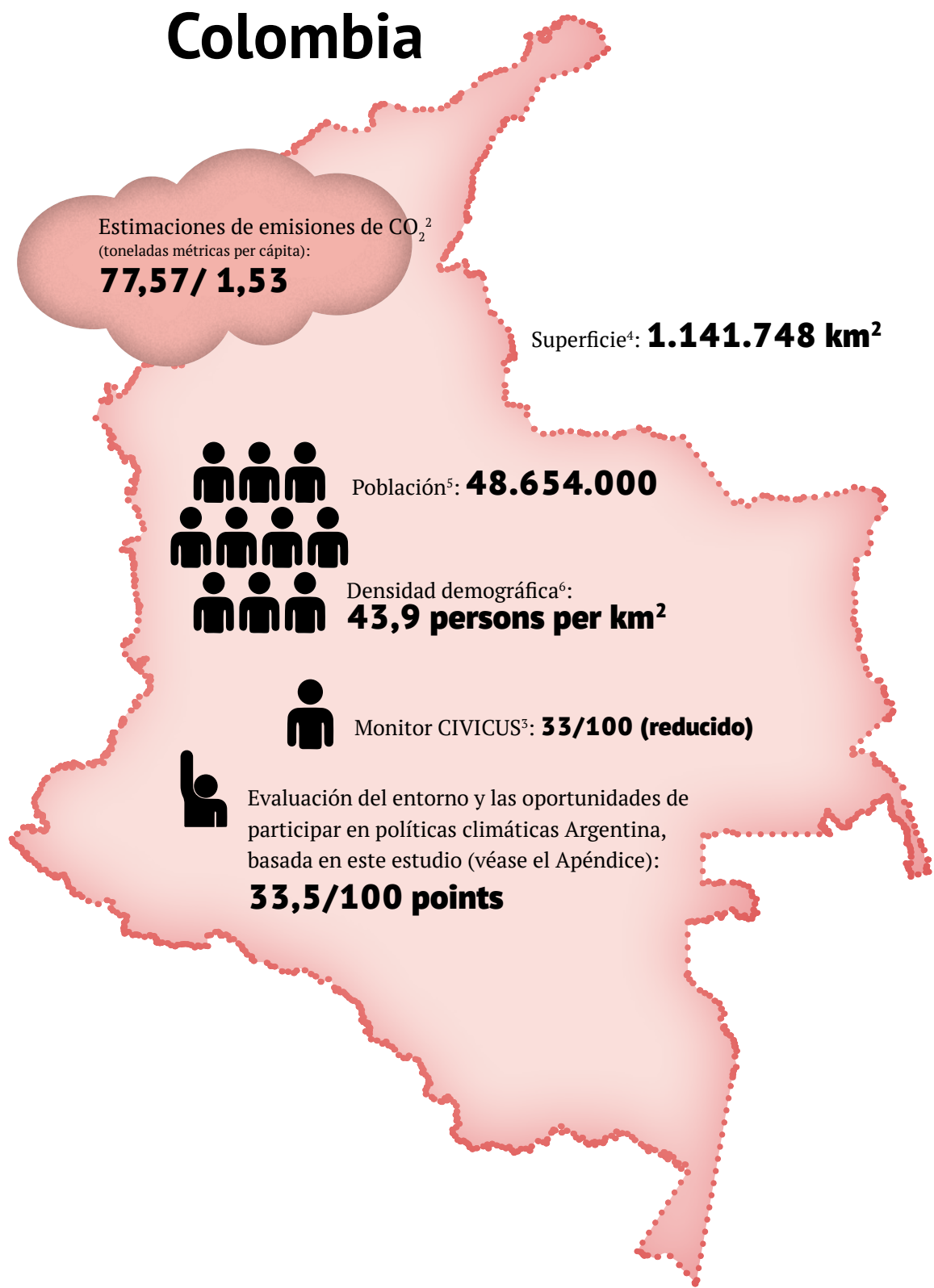


Figura 2: La „huella de participación“

¹ Donges, L.; Stolpe, F.; Sperfeld, F.; Kovac, S. (2020). Civic space for participation in climate policies in Colombia, Georgia and Ukraine. Independent Institute for Environmental Issues. www.ufu.de, consultado el 13 marzo de 2023.



² https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2022 , consultado el 13 de junio 2023

³ El Monitor CIVICUS es una herramienta de investigación creada por la sociedad civil cuyo objetivo es compartir datos sobre el estado de las libertades de la sociedad civil (espacio cívico) en todo el mundo. Analiza en qué medida los Estados cumplen su deber de proteger la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión. A cada país se le asigna una calificación de las siguientes categorías: abierto, restringido, obstruido, reprimido o cerrado. Para más información: <https://monitor.civicus.org>, consultado el 13 de junio 2023.

⁴ https://data.un.org/CountryProfile.aspx/_Docs/CountryProfile.aspx?crName=Argentina , consultado el 07 Junio 2023

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

4 Colombia - Retrato del país

4.1 Información general

Colombia es una república situada en el norte de Sudamérica y el segundo país más poblado de Sudamérica. Limita con el océano Pacífico y el mar Caribe y, en tierra firme, con Panamá al noroeste, Venezuela al este, Brasil al sureste, Perú al sur y Ecuador al suroeste. Bogotá es el centro económico y cultural de Colombia y la capital del país. A diferencia de muchos otros estados latinoamericanos, Colombia se caracteriza por un sistema urbano descentralizado. Además de Bogotá, se han desarrollado otras grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras. Colombia se caracteriza por una distribución muy desigual de la población. Mientras que la región andina y las tierras bajas del Caribe tienen una población total de unos 39 millones de habitantes, la Amazonia, la Orinoquía y el Chocó tienen una población total de sólo 1 millón. Esto significa que aproximadamente la mitad de la superficie del país está muy poco poblada. En términos de biodiversidad, Colombia ocupa el segundo lugar en Sudamérica: el diez por ciento de las especies del mundo están presentes en territorio colombiano. Con una biodiversidad enormemente elevada y debido al gran número de especies endémicas y ecosistemas diversos, Colombia es uno de los llamados países megadiversos. Durante mucho tiempo se ha considerado que la democracia en Colombia tiene dificultades, y el país se enfrenta a muchos retos sociales derivados de conflictos internos históricos (a menudo violentos), corrupción, violencia policial y desigualdad social.

En los últimos 10 años, el desarrollo territorial en Colombia ha experimentado importantes cambios que han determinado las estrategias gubernamentales para la protección del medio ambiente. En 2010, durante el primer mandato de Juan Manuel Santos, se definieron las llamadas "locomotoras" para el crecimiento y la generación de empleo, dentro de las cuales el desarrollo minero y la expansión energética se posicionaron como una de las medidas más prometedoras para la economía del país. Esto abrió la puerta para que empresas internacionales explotaran minerales en Colombia, lo que desencadenó múltiples conflictos ambientales por acceso al agua, contaminación de cuerpos de agua y violaciones a los derechos humanos, entre otros.

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se enfocó en alcanzar la paz total en el país, a través de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. La implementación de este acuerdo ha contribuido a los conflictos ambientales. Entre ellos, las tensiones por la tenencia de la tierra y los conflictos por el uso y acceso a la misma, la deforestación y el aumento de los cultivos ilícitos y el cambio y/o pérdida de los medios de vida de las comunidades.

Entre tanto, durante el gobierno de Iván Duque, 2018-2022, las estrategias de desarrollo del país se enfocaron en temas como paz, equidad y educación. En materia de políticas ambientales, el país adoptó la taxonomía verde como sistema de clasificación de actividades y activos económicos para el logro de objetivos ambientales, desarrollando mercados de capital verde e impulsando la movilización de recursos privados para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, así como los compromisos ambientales internacionales derivados del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante este mismo período, se actualizó la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Colombia, aumentando su ambición a una reducción del 51% de las

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, se publicó la Estrategia de Largo Plazo E2050 para la Resiliencia Climática (Carbono-Neutralidad y Adaptación) (E2050) y se firmó el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Actualmente, la estrategia de gobierno del presidente Gustavo Petro considera la protección del medio ambiente como un pilar esencial para el bienestar nacional y la justicia ambiental y social. Reconoce la lucha contra el cambio climático como base fundamental para las transiciones socio-ecológicas necesarias para alcanzar la sostenibilidad y la paz en todo el país. Esta visión es una clara respuesta a la cantidad históricamente alta de conflictos ambientales en Colombia. El Atlas de Justicia Ambiental enumera 134 conflictos ambientales, asociados principalmente a la extracción de minerales y materiales de construcción, la quema y explotación de combustibles fósiles, y la justicia climática⁷

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) pretende convertir al país en un líder en humanidad y naturaleza, basándose en cinco transformaciones que pretenden que el país alcance la sostenibilidad y la resiliencia climática. Para alcanzarlo, se definen condiciones habilitantes que deben lograrse a nivel subnacional y local, incluyendo marcos para la adaptación al cambio climático y su mitigación; la implementación de transiciones económicas, socio-ecológicas, energéticas y culturales; la resolución de conflictos, y la conservación de la biodiversidad⁸.

Para establecer estas condiciones favorables, el PND incluye acciones estratégicas que permitirán al país pasar de una economía extractivista a una economía productiva que aproveche la biodiversidad como motor del desarrollo territorial. Estas acciones incluyen las siguientes estipulaciones:

- _ la ordenación del territorio debe basarse en la disponibilidad de agua y tener en cuenta el cambio climático
- _ la seguridad humana y la justicia social deben estar garantizadas
- _ el derecho humano a la alimentación debe protegerse
- _ las actividades productivas deben diversificarse con vistas a la internacionalización y la acción por el clima
- _ las brechas sociales y económicas deben ser reducidas, garantizando un acceso adecuado a las oportunidades, los bienes y los servicios

Estas acciones pretenden reforzar la gobernanza local y aumentar la justicia medioambiental para lograr las transformaciones para los próximos 4 años propuestas por el PND⁹.

4.2 Política climática nacional

En el marco de los compromisos climáticos adquiridos por Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el país ha avanzado en la definición de un marco político y jurídico que le permita aumentar su ambición en materia de adaptación y mitigación del cambio climático, gestión ambiental y gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, como se analiza en esta sección, el país aún

7 Environmental Justice Atlas (2022). For Colombia 134 cases have been reported so far. <https://ejatlas.org/country/colombia>, consultado el 30 de julio de 2023

8 DNP (2023). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia Potencia Mundial de la Vida. Departamento Nacional de Planeación: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/2023-03-17-bases-plan-nacional-desarrollo-web.pdf>, consultado el 30 de julio de 2023

9 Ibid.

debe establecer transformaciones significativas para alcanzar sus objetivos climáticos.

En 2020, en virtud del Mecanismo de Presión Paulatina, establecido en el artículo 4 del Acuerdo de París¹⁰, Colombia actualiza su NDC y se compromete a reducir las emisiones de GEI en un 51% respecto al escenario base en 2030¹¹; establece presupuestos de carbono para el periodo 2020-2030 a más tardar en 2023; y reduce las emisiones de carbono negro en un 40% respecto al nivel de 2014. En cuanto a la adaptación, la actualización de la NDC incluye 30 objetivos en ámbitos como la protección y conservación de las cuencas hidrográficas; el tratamiento de las aguas residuales domésticas urbanas; la prevención de enfermedades y la promoción de la salud; y las infraestructuras resilientes. También incorpora ocho cuestiones transversales en la gestión del cambio climático: seguridad alimentaria; transición justa de la mano de obra; derechos humanos; equidad generacional; enfoque diferencial; equidad de género; economía circular y protección del agua, los ecosistemas y la biodiversidad.

Complementariamente, en 2021 el país definió la Estrategia de Largo Plazo E2050¹², como un proceso de identificación de las transformaciones necesarias que deben ocurrir en el país para construir resiliencia climática socio-ecológica de largo plazo. De esta manera, la E2050 es un instrumento de política de Estado que establece las metas globales hacia las cuales deben evolucionar las NDCs y otros instrumentos de política pública nacional y subnacional para la reducción de emisiones de GEI a largo plazo y el fortalecimiento de la resiliencia climática de los territorios. La Estrategia cuenta con 9 compromisos¹³ y 48 opciones de transformación para la transición socio-ecológica. Así, la E2050 presta especial atención al enfoque de género, a los medios de implementación (incluyendo financiación y educación) y a la gestión del riesgo de desastres como aspectos fundamentales para maximizar los resultados de neutralidad de carbono y resiliencia climática¹⁴.

Evidentemente, el Estado colombiano ha avanzado en la definición de una hoja de ruta integral para enfrentar la crisis climática, desarrollada a través de diferentes tipos de instrumentos públicos. Con el fin de facilitar la comprensión e implementación de estos instrumentos, así como los compromisos del país para hacer frente a la crisis climática, en 2021 el Congreso aprobó la Ley 2.169, que promueve el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas de carbono neutralidad y resiliencia climática. De esta manera, la Ley define y desarrolla los pilares de la transición hacia el carbono neutralidad, la resiliencia climática y el desarrollo bajo en carbono, además de establecer las metas y medidas (adaptación y mitigación) en los diferentes sectores de desarrollo y ordenamiento territorial, así como los medios de implementación necesarios para cumplir con las metas.

Sin embargo, en lo que respecta al desarrollo e implementación de las políticas y normas descritas anteriormente, Colombia ha avanzado lentamente. El Climate Action Tracker 2022 lo califica como insuficiente para enfrentar la crisis climática, ya que no está alineado con los objetivos nacionales a largo plazo y no es compatible con la meta global

10 El artículo 4 del Acuerdo de París establece que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) deben ser cada vez más ambiciosas, teniendo en cuenta las responsabilidades comunes pero diferenciadas y de acuerdo con las circunstancias nacionales y las capacidades respectivas de cada Parte.

11 Esto representa un pico máximo de emisiones para el país de 169,44 millones de tCO₂eq en 2030.

12 El documento E2050 está disponible en <https://e2050colombia.com/documentos/>, consultado el 30 de julio de 2023

13 Los compromisos definidos en la E2050 son: gobernanza del conocimiento y del clima; gestión integrada de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas; producción y consumo sostenibles; transición justa de la mano de obra; desarrollo rural sostenible diferenciado por regiones; ciudades-región con desarrollo urbano integrado; diversificación de la matriz energética; movilidad e infraestructuras sostenibles; puesta en marcha de la capacidad de adaptación de la población y del sistema sanitario.

14 Government of Colombia (2021). Estrategia climática de largo plazo de Colombia E2050 para cumplir con el Acuerdo de París. MinAmbiente, DNP, Cancillería, AFD, Expertise France, WRI. <https://e2050colombia.com/documentos/>, consultado el 30 de julio de 2023

de no superar un aumento de temperatura de 1,5°C. Esta situación indica que el país debe tomar medidas para reducir su huella de carbono y emprender acciones más ambiciosas y aceleradas para reducir sus emisiones, empezando por independizar su economía de los combustibles fósiles, especialmente del carbón, del que depende en torno al 10% de su suministro energético y que representó alrededor del 13% de las exportaciones totales en 2020. Si el país continúa por la misma senda de desarrollo, no cumplirá los objetivos de la NDC para 2030. Por lo tanto, se requiere aumentar la cooperación internacional y la ambición de los sectores, así como promover las transformaciones necesarias para alinearse con los objetivos mundiales de reducción de emisiones de GEI15.

Para lograrlo, el país se enfrenta a importantes retos en materia de ordenación del territorio y desarrollo. Destaca la falta de coherencia política y regulatoria con los objetivos climáticos. Esto se hace particularmente visible a través de la Ley 2128 de 2021, que declaró de interés nacional el uso del gas natural, limitando la transición hacia otro tipo de energías alternativas a los combustibles fósiles. Asimismo, las políticas en la Amazonía van en contra de los objetivos climáticos al promover la deforestación, los nuevos proyectos de hidrocarburos, el desarrollo vial, la minería y la apertura de nuevas áreas para la ganadería y el agronegocio16.

A escala local, las limitadas capacidades técnicas y económicas de las autoridades para formular e implementar los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) representan un problema crítico para el desarrollo de acciones climáticas a la velocidad requerida para cumplir con los objetivos nacionales. Esto, sumado a la débil articulación política y normativa que incluye acciones contradictorias en los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo y los PIGCCT, hace que la capacidad municipal para transversalizar la gestión del cambio climático en el ordenamiento territorial sea uno de los grandes retos en Colombia.

Además, en Colombia el cambio climático se percibe a menudo como una cuestión que sólo concierne al sector medioambiental y no se considera determinante para el desarrollo territorial y el bienestar humano. La falta de sistemas de información que apoyen la toma de decisiones y la débil participación de la sociedad civil y las comunidades alimentan este desafío. En muchos casos, los instrumentos públicos generados para hacer frente al cambio climático no responden a las necesidades del territorio ni a las expectativas de sus habitantes. En este sentido, la implementación de la NDC y la E2050 requiere el fortalecimiento de capacidades, la armonización con otros instrumentos de política pública y una planificación nacional y regional sistémica y participativa con enfoque territorial, diferencial, étnico y de género para avanzar hacia una transición justa.

15 Climate Action Tracker (2022). Evaluación de la Gobernanza Climática en Colombia. <https://climateactiontracker.org/countries/colombia/>, consultado el 07 de julio de 2023

16 Botero, R., & Rojas, A. (2018). Transformación de la Amazonía. Repercusiones del efecto sinérgico entre políticas erráticas e ingobernabilidad. Colombia Amazónica(9), 11-31. <https://sinchi.org.co/files/publicaciones/revista/pdf/11/1%20transformacin%20de%20la%20amazonia%20repercusiones%20del%20efecto%20sinrgico%20entre%20politicas%20errticas%20e%20ingobernabilidad.pdf>, consultado el 30 de julio de 2023

Objetivos de política climática y compromiso de política climática del gobierno elegido en 2022 (siguiendo el programa del gobierno):

Después de casi tres meses de debate, el 4 de mayo de 2023, las dos cámaras del Congreso aprobaron el proyecto de ley que promulga el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2026 ((Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia Potencia Mundial de la Vida, PND), que define la hoja de ruta del Ejecutivo para los próximos años. El PND propone una transformación productiva basada en el conocimiento y la armonía con la naturaleza, promoviendo así el objetivo de alcanzar la paz total, superar las injusticias y exclusiones históricas, y garantizar que los conflictos no se reaviven. También establece lineamientos para generar un cambio en la relación entre la sociedad colombiana y la naturaleza, a partir del reconocimiento de la vida en todas sus diversas formas.

El artículo 3 establece los 5 ejes de transformación del PND que buscan hacer de Colombia un territorio líder en acción climática. Estos son: ordenamiento territorial en torno a cuencas hidrográficas; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transformación productiva, internacionalización y acción climática, y convergencia regional.

El Plan cuenta con diferentes artículos que permiten posicionar la gestión de la crisis climática y sus efectos como un eje de desarrollo a escala nacional, apoyando así el avance del país hacia el carbono neutralidad y la implementación de estrategias suficientes para la resiliencia climática y la transición justa. Estos aspectos incluyen:

1. En el eje de transformación productiva, internacionalización y acción climática, el PND pretende diversificar las actividades productivas para que aprovechen el capital natural y profundicen en el uso de energías limpias, garantizando los derechos humanos y construyendo resiliencia frente a los riesgos climáticos.
2. Creación de Consejos Territoriales del Agua en cada una de las ecorregiones y territorios estratégicos priorizados en el PND, que buscan fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, inclusiva y justa del agua y la planificación territorial en torno a este recurso, buscando la consolidación de territorios funcionales con enfoque de adaptación al cambio climático.
3. El artículo 38 crea la Estrategia Nacional de Coordinación para la Adaptación al Cambio Climático de los Asentamientos Humanos y Reasentamientos, liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta coordinará con las entidades sectoriales del nivel nacional y las entidades territoriales, las acciones de reasentamiento, legalización urbana, mejoramiento de asentamientos humanos y ordenamiento territorial, como acción directa para la reducción del riesgo de desastres, mitigación de GEI y adaptación al cambio climático.
4. El artículo 72 transforma el Fondo Mujer Emprende en el Fondo Mujer Libre y Productiva, que permitirá diseñar e implementar acciones e instrumentos financieros y no financieros para apoyar y financiar proyectos e iniciativas que promuevan la autonomía, el empoderamiento económico y la dignificación del trabajo de las mujeres en Colombia con enfoque de sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático.
5. El artículo 226 plantea la posibilidad de que Colombia avance en el desarrollo de investigaciones científicas en la Antártida con el fin de contribuir al conocimiento de los fenómenos climáticos y ambientales del planeta, promoviendo que Colombia se convierta en una potencia regional y mundial para la investigación de la crisis climática.

Además, el PND contiene diferentes puntos que apoyan la transición energética de Colombia, basados en estrategias y mecanismos que conduzcan a una implementación real de este proceso en el país. De esta manera, el PND marca un camino claro para que Colombia avance hacia el carbono neutralidad y la resiliencia climática, aprovechando los aportes de la naturaleza al bienestar humano y reconociendo la diversidad cultural del país.

5 El compromiso de la sociedad civil con el clima y su derecho a la participación

5.1 Requisitos fundamentales

La participación de la sociedad civil en asuntos medioambientales y climáticos en Colombia se ve amenazada por el hecho de que Colombia tiene una larga historia de guerra cívica y conflictos violentos internos entre los gobiernos nacional y regionales, grupos paramilitares, sindicatos criminales y grupos guerrilleros comunistas. Debido a esta historia violenta, muchos colombianos se enfrentaron a heridas físicas y psicológicas durante sus vidas y la desconfianza entre las diferentes partes de la sociedad, las partes en conflicto y los gobiernos regional y nacional aumentó a lo largo de los años. A pesar de las numerosas iniciativas de paz de los últimos años y de algunos éxitos logrados en este campo, el Instituto de Heidelberg para la Investigación Internacional de Conflictos (HIIK) sigue registrando un conflicto de nivel de "guerra limitada" y cinco conflictos de nivel de "conflicto violento" para Colombia en 2022.¹⁷ Además, la vida de las personas que abogan públicamente por el medio ambiente, los llamados defensores del medio ambiente, no es segura y no hay garantías de que se respeten sus derechos fundamentales. Según el informe de Global Witness, Colombia sigue registrando una de las cifras más altas de asesinatos de defensores del medio ambiente en el mundo, con al menos 33 casos registrados¹⁸. Las razones son los conflictos por el desigual uso y tenencia de la tierra; la sustitución de cultivos legales alternativos por cultivos ilícitos; el desplazamiento forzado de ciudadanos; la explotación de hidrocarburos; la minería; y la falta de garantías para la implementación del Acuerdo de Paz. Según el Monitor Civicus, Colombia se encuentra en un nivel represivo, principalmente por la insuficiencia de garantías para permitir la libre manifestación y el aumento de casos de violencia durante las manifestaciones¹⁹. Esto demuestra que el marco legal para la participación en asuntos ambientales en Colombia requiere de garantías que permitan el ejercicio seguro de los derechos y deberes fundamentales de la sociedad civil, así como el desarrollo de espacios amplios, deliberados, incluyentes e informados que permitan a los actores sociales expresar sus preocupaciones y visiones del territorio frente a la crisis climática.

Otro aspecto fundamental que dificulta la participación ambiental en Colombia es el hecho de que el país presenta altos niveles de corrupción que reducen la legitimidad y la confianza de los actores sociales en la administración pública. El Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, califica a Colombia como un país con altos niveles de corrupción con un valor de 39 puntos, ubicándolo en el puesto 91 de 180 países analizados.²⁰ Por lo tanto, reducir los niveles de corrupción y aumentar la transparencia pública son cuestiones críticas para alcanzar el nivel de legitimidad social necesario para las políticas a largo plazo, como las que abordan cuestiones climáticas. No contar con este nivel de legitimidad y confianza en las instituciones públicas socava el ejercicio de la democracia participativa. Limita la influencia de los actores sociales en la gestión pública, tanto en el proceso de toma de decisiones como en la ejecución de las

17 Heidelberg Institute for International Conflict Research – HIIK (2023). Conflict Barometer 2022.

18 Global Witness (2022). Una década de resistencia. Diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo. <https://www.globalwitness.org/es/decade-defiance-es/#resource-library>, consultado el 30 de julio de 2023.

19 Civicus Monitor (2022). El poder ciudadano bajo ataque 2022. Un informe a partir de los datos del CIVICUS Monitor. <https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Informe2021ES.pdf>, consultado el 30 de julio de 2023.

20 Transparency International. (2022). Corruption perceptions index 2021. https://images.transparencycdn.org/images/CPI2021_Report_EN-web.pdf, consultado el 30 de julio de 2023.

mismas y el control de sus resultados, lo que se refleja en una mayor resistencia a la implementación de las políticas y, por tanto, en su grado de eficiencia y eficacia.

5.2 Marco jurídico de la participación

Colombia firmó el Acuerdo de Escazú²¹ el 11 de diciembre de 2019, debido a la demanda de la sociedad civil en el marco de la Mesa Ambiental del Gran Diálogo Nacional. El Congreso de la República lo aprobó el 5 de noviembre de 2022 mediante la Ley 2273 de 2022. Para finalizar el proceso de ratificación, la Corte Constitucional se encuentra realizando el control automático de constitucionalidad del texto del tratado en relación con la Constitución Política de 1991.

Si el fallo de la Corte Constitucional determina que el Acuerdo de Escazú es constitucional, el país asumiría el reto de implementar acciones complementarias al marco jurídico sobre participación ambiental en Colombia y desarrollar nuevas acciones que garanticen la seguridad de los defensores del medio ambiente y de la tierra, a partir de la garantía plena y efectiva de los estándares de democracia ambiental. Este Acuerdo, como tratado de derechos humanos, representa una oportunidad para que Colombia avance de manera acelerada, justa, equitativa e incluyente en la mitigación y adaptación al cambio climático.

En concreto, el Acuerdo es un catalizador de la acción climática al fomentar que las acciones se lleven a cabo bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, que se desarrollan a través de procesos de participación temprana y efectiva de la sociedad civil. Asimismo, genera las condiciones propicias para que las acciones climáticas favorezcan una transición justa, ya que, a través de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental, promueve el empoderamiento y compromiso de los diferentes actores con la acción climática. Fortalece el ciclo de las políticas públicas al formularse en respuesta a las necesidades de los ciudadanos y aumenta la transparencia y la confianza en las instituciones públicas, así como la legitimidad de sus actuaciones. Además, contribuye a la reducción de la conflictividad ambiental al garantizar la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, como se espera que el proceso de implementación total del Acuerdo en la legislación colombiana sea un proceso largo, también es importante analizar la situación legal actual en relación con la participación de la sociedad civil. Colombia no cuenta con leyes específicas que regulen la participación ciudadana en temas climáticos, sin embargo, la Constitución Política de 1991 consagra que Colombia es un Estado democrático, participativo y pluralista, lo cual incluye una serie de mandatos que permiten la participación ciudadana en todas las decisiones que puedan afectar las esferas política, económica, administrativa, ambiental, social y cultural²². De esta manera, la participación en Colombia se constituye como un derecho fundamental y un deber ciudadano, que se desarrolla a través de mecanismos políticos, administrativos y judiciales²³.

21 CEPAL (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu>, consultado el 30 de julio de 2023.

22 Rodríguez, G. (2021). Yo participo, tú participas, otros deciden: la participación ambiental en Colombia. Bogotá: Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol).

23 Corte Constitucional. SU-095 of 2018. Exploración y explotación de recursos naturales no renovables del subsuelo deben ser adoptadas por autoridades nacionales en coordinación y concurrencia de las autoridades territoriales. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU095-18.htm>, consultado el 30 de julio de 2023.

A nivel de política pública, la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) establece la participación ciudadana como parte de sus líneas estratégicas, apoyada en una de sus líneas instrumentales que define la producción de información accesible a todo el público, que permita incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para lograr la resiliencia climática y la carbono-neutralidad.²⁴ Así mismo, la mencionada política establece que los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) deben ser producto de un proceso de planeación participativa con diversos actores, quienes además adquieren responsabilidades para el logro de los objetivos climáticos.

En cuanto a la participación ciudadana en la gestión del cambio climático, el PNCC de Colombia define como uno de sus lineamientos la participación ciudadana, especialmente de los grupos y personas más vulnerables, como un aspecto del cual depende la formulación de acciones adecuadas de adaptación y mitigación, que permitan al país avanzar hacia un desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono.²⁵

Este mandato se desarrolla en los principios rectores para la implementación y reglamentación de la Ley de Cambio Climático (Ley 1931 de 2018), y también hace parte de los propósitos del Sistema Nacional de Gobernanza del Cambio Climático de Colombia (SISCILIMA). La aplicación se dio principalmente a través de la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización Ciudadana en Cambio Climático, la cual tiene como objetivo "brindar lineamientos para la implementación de programas y proyectos que promuevan el acceso a la información, la sensibilización ciudadana, la formación, la educación, la investigación y la participación para contribuir a la construcción de capacidades a nivel local, regional y nacional en materia de cambio climático"²⁶.

El compromiso político de involucrar a la sociedad civil en las decisiones relacionadas con el cambio climático queda reflejado en la guía de formulación del PIGCCT, especialmente en la fase preparatoria, que establece que tanto la formulación como la implementación de estos instrumentos contarán con la participación proactiva de los distintos ciudadanos, incluyendo representantes de los sectores público y privado, organizaciones no gubernamentales y el sector productivo.²⁷ A pesar de ello, la PNCC carece de medidas concretas para promover "espacios de concertación y trabajo conjunto entre las instituciones de los diferentes sectores y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema"²⁸ Esta situación se refleja en el proceso de elaboración de las NDC del país, que cuenta con una estrategia de participación, pero en la práctica la sociedad civil constató que la implicación y participación de los grupos étnicos fue insuficiente. Los espacios realizados en el marco de esta estrategia se limitaron a recabar información sobre las perspectivas de la población sobre el cambio climático, más que a su inclusión en la elaboración de los objetivos específicos de la segunda NDC del país.²⁹ Fortalecer la gobernanza climática participativa en el país requeriría de acciones más concretas y coordinadas que ayuden a

24 MADS (2017). Política Nacional de Cambio Climático. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Politica_Nacional_de_Cambio_Climatico_-_PNCC/PNCC_Politicas_Publicas_LIBRO_Final_Web_01.pdf, consultado el 30 de julio de 2023

25 Ibid.

26 IDEAM, MAVDT, PNUD (2010). Estrategia Nacional de Educación y Sensibilización de Públicos sobre cambio climático. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). <http://www.ideam.gov.co/documents/40860/219937/ESTRATEGIA+NACIONAL+DE+EDUCACION+CAMBIO+CLIMATICO.pdf>, consultado el 30 de julio de 2023.

27 MADS, PNUD (2022). Guía para la formulación e implementación de los planes integrales de gestión del cambio territoriales. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. <https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/guia-para-formulacion-e-implementacion-de-los-planes-integrales-de-gestion-del-cambio-climatico-territoriales-pigcct/>, consultado el 30 de julio de 2023.

28 MADS (2017)

29 Aguilar, M. (2020). Observaciones y comentarios al borrador de actualización de la NDC de Colombia. Fundación Ambiente y Sociedad. <https://www.ambienteysociedad.org.co/>, consultado el 30 de julio de 2023

tomar mejores decisiones acordes con los intereses de los actores sociales³⁰. Esto se traduciría en mayores niveles de eficacia y eficiencia, así como en una mayor responsabilidad y transparencia de la administración pública ante la crisis climática³¹.

Además, la Ley 1931 de 2018 establece principios que orientan la participación ciudadana en la gestión del cambio climático en el país, como la autogestión y la corresponsabilidad, que convocan a todos los actores sociales a enfrentar la crisis climática. Esta norma define lineamientos para la generación y acceso a información climática transparente y oportuna para apoyar la toma de decisiones. Asigna a los ministerios que forman parte del SISCLIMA, en el marco de sus competencias, la responsabilidad de generar y compilar la información necesaria para reportar los avances de los PIGCCT y de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS). Dicha información deberá estar disponible en el Sistema Nacional de Información de Cambio Climático que hace parte de los principales arreglos institucionales para la gestión del cambio climático en Colombia definidos en la NDC actualizada del país al 2020.

En materia de conservación de bosques y lucha contra la deforestación, tema relevante para lograr el carbono neutralidad y la resiliencia climática en el país, se desarrolló la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y la Gestión de Bosques (EICDGB), a través de un proceso de participación temprana y diálogos con diferentes actores que tienen incidencia en los bosques del país. Sin embargo, el país aún enfrenta retos para que la implementación de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) no vulnere las garantías fundamentales de las comunidades y grupos étnicos.

Finalmente, vale la pena destacar los Lineamientos elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la integración del enfoque de género en los proyectos, programas, planes y políticas para la gestión del cambio climático en los sectores de ambiente y desarrollo sostenible, industria, minería y energía, transporte y agricultura. Estas directrices proporcionan pautas y recomendaciones para garantizar una transición justa a través de la igualdad de género en la mitigación y adaptación al cambio climático. De esta manera, la guía desarrolla el enfoque de género como una forma de abrir nuevos espacios para la participación de las mujeres en las acciones para construir resiliencia climática y alcanzar la neutralidad de carbono³².

Lo anterior demuestra que Colombia cuenta con un marco institucional, jurídico y de políticas públicas sobre cambio climático que incluye garantías para el acceso a la información y la participación ciudadana. Estas circunstancias constituyen factores habilitantes que pueden ser fortalecidos a través de la democracia ambiental y así contribuir a la creación de condiciones que faciliten la implementación coherente e integral de las metas climáticas del país. Las leyes ambientales y climáticas en Colombia son compatibles con los pilares de acceso a la información y participación ambiental definidos en el Acuerdo de Escazú, sin embargo, el país falla en su aplicación efectiva. Esto se evidencia en los procesos de participación que se dan en el marco de la construcción de instrumentos públicos de planeación y desarrollo, que en muchos casos se reducen a espacios de consulta sin incidencia directa de las opiniones de la sociedad civil y las comunidades en la toma de decisiones.

30 Bárcena, A., & de Miguel, C. (2016). Más ciudadanía para el desarrollo sostenible. Notas de la CEPAL N°88, June 2016. Comisión Económica para América Latina y el Caribe : <https://www.cepal.org/es/articulos/2016-mas-ciudadania-desarrollo-sostenible> consultado el 30 de julio de 2023.

31 United Nations (2012). Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/sites/default/files/pages/files/n1244046_esp.pdf, consultado el 30 de julio de 2023

32 MADS, PNUD (2021)

5.3 Gobernanza y estructuras

Para apoyar el diálogo con la sociedad civil sobre la política colombiana de cambio climático, se creó el Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC) como órgano consultivo permanente de la CICC en el marco de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) y de los objetivos del SISCLIMA de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre cambio climático. Su función es asesorar en la toma de decisiones para promover la coordinación con los sindicatos, las organizaciones sociales, las Comisiones Quintas del Congreso y el mundo académico.

A nivel regional, los Nodos Regionales de Cambio Climático son la principal instancia de desarrollo e implementación de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Sus miembros incluyen representantes de la sociedad civil, sindicatos y representantes del sector privado, la academia y las instituciones sin ánimo de lucro (Decreto 298, 2016). Como resultado, son instituciones importantes para la participación pública en asuntos climáticos. Los resultados de la participación pública en estas instancias deben ser incorporados en la formulación del PIGCCT.

Estos órganos tienen como objetivo facilitar la planificación transversal de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en las regiones y promover el desarrollo de estrategias regionales y subnacionales de cambio climático coherentes con el ámbito nacional. Con el fin de trasladar las cuestiones debatidas en el seno de los nodos regionales de cambio climático al ámbito nacional, la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgos nombra a una persona encargada de mantener una comunicación constante con los nodos y hacer un seguimiento de las actividades e iniciativas desarrolladas en estos órganos. Sin embargo, la capacidad de los nodos regionales para apoyar la implementación de la política climática nacional es limitada y, por lo tanto, su capacidad para llevar las discusiones de los actores sociales al nivel nacional también lo es. Una de las razones de esta situación es la falta de personalidad jurídica de los nodos, lo que significa que no pueden contratar personal independiente, disponer de presupuesto propio ni emprender acciones legales. Esto limita su autonomía a la hora de poner en marcha proyectos o iniciativas legales que los miembros de los nodos consideren necesarios.

5.4 En la práctica: procesos de participación

Según el MADS, el proceso de actualización de la NDC colombiana se desarrolló con base en la "Estrategia de Participación para el Proceso de Actualización de la NDC", elaborada con el apoyo técnico del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Esta estrategia incluyó las siguientes formas de participación:

- _ talleres sectoriales (noviembre 2019) para la actualización de los componentes de mitigación, adaptación y medios de implementación.
- _ Talleres con los 9 CCRN para incluir la perspectiva de las regiones en el proceso (mayo de 2020).
- _ una encuesta a 150 expertos (8 y 22 de octubre de 2020)
- _ consulta pública sobre el proyecto de CND (disponible del 6 al 26 de octubre de 2020)
- _ diálogos con representantes de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas (octubre de 2020)

- _ Espacios de diálogo con jóvenes y mujeres a través de la iniciativa Promesa Climática y WWF.
- _ una segunda ronda de talleres con los CCRN.

Para la consulta pública de la NDC se fijó un plazo de 20 días para recibir comentarios. A pesar del poco tiempo disponible para revisar el documento, la sociedad civil hizo importantes comentarios que se incluyeron, como la inclusión de la igualdad de género, los derechos humanos y los diferentes enfoques sobre las comunidades étnicas y los grupos vulnerables.

Otro proceso de participación digno de mención tuvo lugar en el marco del desarrollo de la Estrategia a Largo Plazo para la Neutralidad del Carbono y la Resiliencia Climática (E2050). En este proceso participaron más de 2100 personas de unas 500 instituciones en los más de 300 espacios de encuentro y trabajo que se habilitaron. Esto permitió la participación de representantes de instituciones públicas y privadas, de la sociedad civil y de comunidades indígenas y afrocolombianas. Los espacios fueron liderados por el equipo de elaboración de la estrategia con la participación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), WWF y el colectivo de la sociedad civil "Voces 2030 Colombia", y con el apoyo financiero de Expertise France. En el caso de las comunidades étnicas, se abrieron espacios de conversación no formales para establecer la hoja de ruta para continuar el proceso participativo durante la implementación de la E2050. Además, durante los 19 meses de desarrollo de la estrategia se celebraron más de 70 reuniones, entre talleres y reuniones bilaterales con grupos de expertos interinstitucionales. En cuanto a la sociedad civil organizada y no organizada, se realizaron nueve talleres regionales liderados por el colectivo Voces 2030 Colombia, con más de 370 participantes, entre jóvenes, mujeres y representantes de organizaciones de base. Estos permitieron definir y concretar el alcance y contenido de los compromisos de la Estrategia y las opciones de transformación que contiene.

En consecuencia, en Colombia se han creado espacios de participación en la formulación de políticas públicas climáticas para promover la participación ciudadana en temas ambientales y climáticos. Sin embargo, en algunas zonas del país, es difícil para los actores llegar a los espacios de participación debido a la difícil conectividad a internet, infraestructura y condiciones de movilidad. Este aspecto no se tiene en cuenta en las medidas de participación, lo que hace que las comunidades que viven en zonas alejadas de los centros urbanos no puedan influir en los procesos de toma de decisiones sobre el clima.

5.5 Creación de capacidad

En el marco de la implementación del artículo 6 de la CMNUCC, el Estado colombiano formuló la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización Ciudadana sobre Cambio Climático. Esta tiene como objetivo "establecer lineamientos para la implementación de programas y proyectos que promuevan el acceso a la información, la sensibilización, la capacitación, la educación, la investigación y la participación para contribuir al fortalecimiento de capacidades a nivel local, regional y nacional en materia de cambio climático". En el marco del plan de acción de esta estrategia, se han desarrollado herramientas educativas para diferentes grupos destinatarios, como cursos virtuales, vídeos, folletos informativos y otros. El objetivo de estas herramientas es capacitar a los distintos agentes y sensibilizar a la opinión pública sobre el cambio climático.

Además, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS) ha desarrollado la Escuela Nacional de Educación Ambiental (Savia), que ofrece cursos virtuales en el campo del cambio climático, abarcando temas como aspectos generales del cambio climático, prevención de incendios forestales y proyectos REDD+, entre otros. Las actividades de Savia también incluyen actividades de educación ambiental con estudiantes de escuelas y universidades del país para promover la conservación de la biodiversidad.

Con el fin de facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, el MADS ha creado espacios, mecanismos y medidas para promover la participación ciudadana y así fortalecer la influencia de los ciudadanos y grupos de interés en las decisiones y acciones públicas adelantadas por el Ministerio y sus entidades subordinadas. En este marco, el MADS define los siguientes ámbitos para los procesos participativos:

- **Participación en la identificación de los problemas medioambientales** que deben abordarse y en la recopilación de información medioambiental básica fundamental para el desarrollo y la formulación de políticas y medidas de planificación específicas. La participación en este ámbito tiene lugar a través de consultas públicas y canales electrónicos.

- **Planificación y/o presupuesto participativo:** En este ámbito, el MADS trata de implicar a los ciudadanos y las partes interesadas en la formulación, aplicación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y procedimientos para facilitar la toma de decisiones. También pretende implicar a los ciudadanos en la asignación de cierta proporción del presupuesto del ministerio. Esto permitirá que los programas y proyectos de especial interés para los ciudadanos reciban un apoyo especial en consonancia con el plan de desarrollo vigente.

- **Colaboración e innovación abierta:** Se trata de un espacio abierto por MADS donde los ciudadanos pueden conocer y participar en los retos y avances de la innovación hacia el desarrollo sostenible del país.

- **Rendición de cuentas:** Se ha creado un espacio para que las instituciones públicas informen, expliquen y publiquen los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil y otros organismos públicos.

- **Control social:** Dentro de su definición como derecho y deber de los ciudadanos a participar individual o colectivamente en el control de la gestión pública, el MADS cuenta con diversas modalidades de control social, entre las que destacan el canal de denuncias y las medidas de rendición de cuentas.

Los objetivos mencionados fueron desarrollados y formulados en el marco de la elaboración de los principios de participación y gobierno abierto del Estado colombiano, pero

su implementación es muy desafiante y en la práctica no siempre se garantiza que los resultados de los procesos participativos tengan un impacto real en la toma de decisiones. Sin embargo, la introducción de estos principios ha hecho obligatoria la adhesión oficial a los mismos por parte de las autoridades públicas, fortaleciendo así su capacidad y sensibilidad frente a la participación ciudadana.

Además del desarrollo de capacidades en el ámbito de la participación, las autoridades ambientales en Colombia han desarrollado estrategias para desarrollar capacidades en temas climáticos en las autoridades locales y apoyarlas en la integración del cambio climático en la preparación de los instrumentos de planificación del uso del suelo (planes, líneas de base y planes de zonificación). Por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha elaborado la guía "Orientaciones para la integración del cambio climático en los planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT)". Contiene propuestas metodológicas para las autoridades locales con el fin de fortalecer el vínculo entre el cambio climático y la gestión del riesgo en la planificación del uso del suelo. El objetivo es apoyar a los municipios para que se adapten a los impactos del cambio climático y diseñen sus conceptos de desarrollo municipal para un desarrollo bajo en carbono y resistente al clima.



6 Recomendaciones para reforzar la participación de la sociedad civil en la política climática y mejorar las futuras revisiones de las CND

Los análisis presentados en los capítulos anteriores muestran que el Estado colombiano, en el marco del proceso de formulación y seguimiento de políticas públicas, normas e instrumentos de planificación y gestión en materia de cambio climático, prevé medidas pertinentes para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y participación ciudadana. Sin embargo, aún existen retos en el país para fortalecer el ejercicio pleno de estos derechos en el contexto de las políticas climáticas. Este capítulo presenta recomendaciones derivadas del status quo analizado de las condiciones para la participación de la sociedad civil en asuntos climáticos en Colombia. Esto incluye una breve presentación de las barreras y desafíos identificados para la participación efectiva. Las siguientes recomendaciones son específicas para cada país y pretenden orientar a los responsables políticos nacionales, a otros actores relevantes para la formulación de políticas relacionadas con el clima y la participación, como las instituciones internacionales y los donantes, así como a la propia sociedad civil.

Aplicación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú

La implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú y la incorporación de todos sus requisitos en la legislación nacional colombiana fortalecerán la coherencia política y normativa, los vínculos interinstitucionales e intersectoriales y el equilibrio entre los procesos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en la toma de decisiones de política ambiental y climática. Esto contribuye a la creación de una arquitectura de buen gobierno que promueve la eficiencia, la eficacia, la sostenibilidad y la legitimidad de las políticas públicas, las estrategias para el desarrollo sostenible y la acción climática.

Reforzar la participación en la elaboración de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCS) y los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) para aumentar su legitimidad

En cuanto a la participación pública en cuestiones climáticas, el PIGCCS y el PIGCCT tienen un horizonte inicial de planificación hasta 2029 y se aplicarán después a lo largo de un periodo de 20 años. Debe aprovecharse la oportunidad de su preparación para que la legitimidad y el apoyo público a sus medidas se garanticen más allá de los periodos de la actual legislatura mediante la participación amplia y efectiva de los diferentes sectores y partes interesadas.

Protección de los derechos de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos y pacificación de los conflictos medioambientales

La participación temprana, plena y efectiva de los diferentes actores territoriales puede ser una estrategia eficaz para reducir los conflictos medioambientales relacionados con los derechos sobre la tierra, la degradación medioambiental y el cambio climático. Al permitir que los ciudadanos y las comunidades participen en las decisiones que afectan a su territorio, se puede

evitar la aparición de protestas y conflictos. Sin embargo, es importante garantizar que todos los ciudadanos, especialmente los representantes de grupos vulnerables, puedan expresarse libre y abiertamente y plantear sus preocupaciones sin que ello suponga un riesgo para ellos o sus familias. Para ello es necesario garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso efectivo y oportuno a los órganos judiciales y administrativos, a fin de crear un entorno propicio para el trabajo de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, basado en medidas adecuadas para reconocer, proteger y promover sus derechos.

7 Conclusión

Colombia se enfrenta a complejos obstáculos en lo que respecta a la participación de la sociedad civil en cuestiones medioambientales en general, incluidos los asuntos climáticos. Los conflictos históricos, la violencia y las amenazas han creado una cultura de desconfianza entre los distintos miembros de la sociedad. Esto dificulta a los defensores del medio ambiente el ejercicio seguro de sus derechos. Los altos niveles de corrupción debilitan aún más la confianza en las instituciones públicas, obstaculizando la eficacia de la democracia participativa. Aunque Colombia ha establecido marcos legales y mecanismos para la participación pública, la aplicación de estas medidas sigue siendo un reto. Los procesos de participación, aunque existen, no siempre tienen un impacto significativo en la toma de decisiones. Garantizar la igualdad de acceso a los espacios de participación, especialmente en zonas remotas, sigue siendo un reto que hay que abordar. La firma y actual ratificación del Acuerdo de Escazú representa un hito histórico para Colombia que puede ayudar a mejorar el espacio cívico en Colombia. Sin embargo, la incorporación de los principios y requisitos de este acuerdo a la legislación nacional, y sobre todo la posterior aplicación en la práctica, aún se prevé que sea un proceso largo y con muchos retos.

En cuanto a las políticas climáticas, Colombia ha mostrado su compromiso para hacer frente al cambio climático a través de su marco nacional de política climática y alineándolo con el Acuerdo de París. El país ha establecido objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de GEI, proteger los ecosistemas y promover la resiliencia climática. Sin embargo, hay desafíos críticos que deben abordarse para lograr estos objetivos de manera efectiva. Colombia se enfrenta a la necesidad de acelerar y ampliar sus esfuerzos de acción climática. La trayectoria actual es insuficiente para alcanzar los objetivos climáticos nacionales y las metas mundiales. Además, existe una falta de coherencia política y normativa con los objetivos climáticos. Esto se hace evidente a través de políticas que promueven la deforestación, los proyectos de hidrocarburos y la minería en la región amazónica. Estas acciones van en contra de los objetivos climáticos del país. A nivel local, las limitadas capacidades técnicas y económicas dificultan la formulación y aplicación efectivas de los Planes Integrados de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT). Los municipios luchan por integrar la gestión del cambio climático en la planificación del uso del suelo, lo que pone de relieve la necesidad de desarrollar capacidades y mejorar la coordinación.

Para mejorar la participación de la sociedad civil en Colombia, sería necesaria la aplicación de las recomendaciones desarrolladas en este estudio, incluida la plena aplicación del Acuerdo de Escazú a nivel nacional, una mayor participación en la preparación de los planes climáticos y la plena protección de los defensores del medio ambiente. Si bien Colombia ha dado pasos significativos en su marco de política climática, abordar los retos esbozados e implementar las recomendaciones mencionadas será crucial para que el país aborde eficazmente la crisis climática y garantice una participación significativa de la sociedad civil en la acción climática.

Bibliografía

A

Aguilar, M. (2020). *Observaciones y comentarios al borrador de actualización de la NDC de Colombia*. Fundación Ambiente y Sociedad. <https://www.ambienteysociedad.org.co/>, accessed 30 July 2023

B

Bárcena, A., & de Miguel, C. (2016). *Más ciudadanía para el desarrollo sostenible*. Notas de la CEPAL N°88, June 2016. Comisión Económica para América Latina y el Caribe : <https://www.cepal.org/es/articulos/2016-mas-ciudadania-desarrollo-sostenible> , accessed 30 July 2023

United Nations (2012). Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/sites/default/files/pages/files/n1244046_esp.pdf , accessed 30 July 2023

Botero, R., & Rojas, A. (2018). Transformación de la Amazonía. Repercusiones del efecto sinérgico entre políticas erráticas e ingobernabilidad. Colombia Amazónica(9), 11-31. <https://sinchi.org.co/files/publicaciones/revista/pdf/11/1%20transformacin%20de%20la%20amazonia%20repercusiones%20del%20efecto%20sinrgico%20entre%20polticas%20errticas%20e%20ingobernabilidad.pdf> , accessed 30 July 2023

D

Donges, L., Stolpe, F., Sperfeld, F., Kovac, S. : *Civic space for participation in climate policies in Colombia, Georgia and Ukraine*. (2020) Independent Institute for Environmental Issues. Berlin. ISBN 978-3-935563-42-0

DNP (2023). *Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026*. Colombia Potencia Mundial de la Vida. Departamento Nacional de Planeación: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/2023-03-17-bases-plan-nacional-desarrollo-web.pdf> , accessed 30.07.2023

G

Government of Colombia (2021). *Estrategia climática de largo plazo de Colombia E2050 para cumplir con el Acuerdo de París*. MinAmbiente, MinAmbiente, DNP, Cancillería, AFD, Expertise France, WRI. <https://e2050colombia.com/documentos/> , accessed 30 July 2023

H

Heidelberg Institute for International Conflict Research. (2020). *Conflict Barometer 2021*.

I

IDEAM, MAVDT, PNUD (2010). *Estrategia Nacional de Educación y Sensibilización de Públicos sobre cambio climático*. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). <http://www.ideam.gov.co/documents/40860/219937/ESTRATEGIA+NACIONAL+DE+EDUCACION+CAMBIO+CLIMATICO.pdf> , accessed 30 July 2023

M

MADS (2017). *Política Nacional de Cambio Climático*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Politica_Nacional_de_Cambio_Climatico_-_PNCC/_PNCC_Politiclas_Publicas_LIBRO_Final_Web_01.pdf , accessed 30 July 2023

MADS, PNUD (2022). *Guía para la formulación e implementación de los planes integrales de gestión del cambio territoriales*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. <https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/guia-para-formulacion-e-implementacion-de-los-planes-integrales-de-gestion-del-cambio-climatico-territoriales-pigcct/> , accessed 30 July 2023

MADS, IDEAM. (2017). *Bosques Territorios de Vida*. Estrategia Integral de Control de la

Deforestación y Gestión de los Bosques. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). https://www.minambiente.gov.co/images/Estrategia_Integral_de_control_a_la_Deforestacion_y_Gestion_de_los_Bosques.pdf , accessed 30 July 2023

R

Rodríguez, G. (2021). *Yo participo, tú participas, otros deciden: la participación ambiental en Colombia* . Bogotá. Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol).

Apéndice

Evaluación del entorno y oportunidades de participación

Criterio 1 Requisitos fundamentales

Indicadores	Puntuación	Puntuación final
a. Estabilidad y paz (¿Cuál es la intensidad de los conflictos en curso?) ³³	0 = alta intensidad del conflicto (guerra limitada o guerra en curso) 1 = intensidad media (crisis violenta en curso) 2 = baja intensidad del conflicto (crisis no violenta o disputa en curso) 3 = muy baja intensidad del conflicto (no hay disputa, crisis o guerra en curso)	1
b. Anticorrupción y transparencia (¿Cuál es el nivel de corrupción percibido?) ³⁴	0 = altamente corrupto, CPI (Índice de Percepción de la Corrupción) de 0 1 = corrupto, CPI igual o por debajo de 50 2 = limpio, CPI por encima de 50 3 = muy limpio, CPI de 100	0
c. Seguridad de personas defensoras del medio ambiente (¿Son seguros los defensores del medio ambiente?) ³⁵	0 = nivel de seguridad alarmantemente débil para las personas defensoras del medio ambiente (más de un asesinato documentado) 1 = nivel de seguridad débil para las personas defensoras del medio ambiente (un asesinato documentado) 2 = Las personas defensoras cuentan con algo de seguridad (no hay asesinatos documentados)	0
d. Compromiso político (¿Está la participación política de la sociedad civil relacionada con el medio ambiente y el clima respaldada por los órganos políticos de alto nivel y los responsables de la toma de decisiones?)	0 = no 1 = sí, hasta cierto punto 2 = sí, completamente	0
	Puntuación máxima: 10	1

³³ Este indicador y la puntuación correspondiente se basan en el Barómetro de Conflictos 2022 de HIIK (<https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en>, consultado el 24 de mayo de 2023). El Barómetro de Conflictos utiliza un modelo de cinco niveles, que define las disputas y las crisis no violentas como conflictos no violentos con una intensidad de conflicto baja, las crisis violentas como conflictos violentos con una intensidad de conflicto media y las guerras limitadas y las guerras como conflictos violentos con una intensidad de conflicto alta.

³⁴ Este indicador y la puntuación correspondiente se basan en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparency International (<https://www.transparency.org/en/cpi/2022>, consultado el 24 de mayo de 2022). Según Transparency Internacional, una puntuación de cero significa "muy corrupto" y 100 es "muy limpio". La puntuación "1=corrupto" y 2="limpio" fue establecida por la UfU. Transparency Internacional define la corrupción como el "abuso del poder confiado para beneficio propio", mientras que "la transparencia consiste en arrojar luz sobre normas, planes, procesos y acciones". (...) "Es la forma más segura de protegerse contra la corrupción, y ayuda a aumentar la confianza en las personas e instituciones de las que depende nuestro futuro". (www.transparency.org/what-is-corruption, consultado el 24 de mayo de 2023).

³⁵ En la medida de lo posible, este indicador y la puntuación correspondiente se basan en el informe de Global Witness "Decade of defiance", que documenta el asesinato de activistas medioambientales y de la tierra en 2021 (<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/decade-defiance>, consultado el 24 de mayo de 2023). Es importante señalar que la ausencia de asesinatos no significa que no haya otras amenazas, ataques u hostigamientos a defensores y activistas medioambientales.

Criterio 2 Legislación aplicable

Indicadores s	Puntuación	Puntuación final
a. Compromiso con los convenios y acuerdos internacionales (¿Ha firmado y ratificado el país -aceptado, aprobado, adherido- el Convenio de Aarhus o el Acuerdo de Escazu en los que se solicita la participación de la sociedad civil? ¿implicada en cuestiones de medio ambiente y clima?)	0 = no, ni ha firmado ni ha ratificado (aceptado, aprobado, accedido a) 1 = firmado, pero no ratificado (aceptado, aprobado, accedido a) 2 = ratificado (aceptado, aprobado, accedido a)	1
b.Leyes nacionales que exijan la participación proactiva de la sociedad civil la constitución,marcos jurídicos nacionales relacionados con el medio ambiente y el clima, leyes de evaluación ambiental estratégica o Leyes sectoriales relacionadas con el clima (energía, industria, transporte, silvicultura o uso del suelo.) obligan al Estado o a los departamentos estatales a nivel nacional a buscar proactivamente la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y el clima, yendo más allá de las notificaciones oficiales de actos participativos?) ⁴	0 = ninguna de las leyes evaluadas 1 = la minoría de las leyes evaluadas 2 = la mayoría de las leyes evaluadas 3 = todas las leyes evaluadas	1
c. Leyes nacionales que exigen la participación oportuna (¿En qué medida la constitución, marcos jurídicos nacionales relacionados con el medio ambiente y el clima, leyes de evaluación ambiental estratégica o leyes sectoriales relacionadas con el clima (energía, industria, transporte, silvicultura, uso del suelo) requieren la participación oportuna (antes de que se haya tomado una decisión, de modo que haya tiempo suficiente para que las autoridades tengan en cuenta las observaciones del público) de la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y la gestión ecológicamente racional del mismo. clima?)	0 = ninguna de las leyes evaluadas 1 = la minoría de las leyes evaluadas 2 = la mayoría de las leyes evaluadas 3 = todas las leyes evaluadas	1

d. Leyes nacionales que exigen información en relación con el proceso participativo (¿En qué medida la constitución, marcos jurídicos nacionales relacionados con el medio ambiente y el clima, leyes de evaluación ambiental estratégica o leyes sectoriales relacionadas con el clima (energía, industria, transporte, silvicultura, uso del suelo) requieren que se ponga a disposición de la sociedad civil toda la información relevante para los procesos de toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y el clima, sin que la sociedad civil tenga que hacer una petición oficial de dicha información?)	0 = ninguna de las leyes evaluadas 1 = la minoría de las leyes evaluadas 2 = la mayoría de las leyes evaluadas 3 = todas las leyes evaluadas	1
e. Leyes nacionales que exigen la consideración de los comentarios de la sociedad civil (¿En qué medida la constitución, marcos jurídicos nacionales relacionados con el medio ambiente y el clima, leyes de evaluación ambiental estratégica o leyes sectoriales relacionadas con el clima (energía, industria, transporte, silvicultura, uso del suelo) requieren que el Estado o los departamentos estatales a nivel nacional tengan debidamente en cuenta los comentarios de la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y el clima?).	0 = ninguna de las leyes evaluadas 1 = la minoría de las leyes evaluadas 2 = la mayoría de las leyes evaluadas 3 = todas las leyes evaluadas	1
f. Leyes nacionales que exigen la notificación a la sociedad civil de la decisión que se ha tomado, junto con las razones y consideraciones en las que se ha basado. (¿En qué medida la constitución, marcos jurídicos nacionales relacionados con el medio ambiente y el clima, leyes de evaluación ambiental estratégica o leyes sectoriales relacionadas con el clima (energía, industria, transporte, silvicultura, uso del suelo) requieren que el Estado o los departamentos del Estado a nivel nacional informen sin demora a la sociedad civil sobre la decisión y proporcionen una respuesta por escrito explicando qué comentarios se han tenido en cuenta y cuáles se han descartado y por qué razones?)	0 = ninguna de las leyes evaluadas 1 = la minoría de las leyes evaluadas 2 = la mayoría de las leyes evaluadas 3 = todas las leyes evaluadas	1
	Puntuación máxima: 17	6

Criterio 3 Gobernanza y estructuras de apoyo

Indicadores	Puntuación	Puntuación final
a. Estructura de gobierno (¿Existe un órgano o mecanismo institucional, como un comité, división o centro que apoye y coordine los procesos participativos relacionados con el medio ambiente y el clima?)	0 = no 2 = sí	2
b. Coordinación y cooperación institucional (¿Se coordinan los procesos participativos nacionales relacionados con el medio ambiente y el clima en los distintos niveles políticos horizontales y verticales?)	0 = no 1 = hay una coordinación y cooperación débil 2 = hay una buena coordinación y cooperación 3 = hay una muy buena coordinación y cooperación	1
c. Recursos financieros (¿Reciben los agentes de la sociedad civil apoyo financiero para participar en la política medioambiental/climática, por ejemplo, subvenciones, compensación por gastos de viaje o financiación de personal?)	0 = no 1 = sí, hasta cierto punto 2 = sí, totalmente	0
	Puntuación máxima: 7	3

Criterio 4 Procesos de participación de alta calidad⁵

Indicadores	Puntuación	Puntuación final
a. Participación temprana (¿En qué momento empezó a participar la sociedad civil en el proceso?)	0 = después de que el grueso de las decisiones ya se hubiera tomado 1 = después del primer borrador del documento/plan/estrategia 2 = desde el principio en adelante	1
b. Convocatoria generalizada, inclusiva (¿Se invitó a participar a una amplia gama de representantes de la sociedad civil (OSC y público en general), incluidos, por ejemplo, representantes de grupos juveniles, de género, indígenas y de personas de color?)	0 = no, sin representantes de la sociedad civil 1 = sin amplia variedad, solo algunas OSC seleccionadas 2 = solo OSC o solo amplio público 3 = sí, una amplia variedad	1
c. Invitación oportuna (¿Se invitó anticipadamente a la sociedad civil a participar?)	0 = con algunos días de antelación 1 = con menos de un mes de antelación 2 = con más de un mes de antelación	0

d. Formatos de participación adecuados (¿Cómo participó la sociedad civil en el proceso?)	0 = mediante información 1 = mediante consulta 2 = mediante diferentes formatos interactivos que promueven el diálogo y la colaboración	1
e. Transparencia e información (¿Se facilitó información a la sociedad civil sobre el contexto técnico y el proceso participativo?)	0 = no 1 = sí, hasta cierto punto 2 = sí, mucha información	1
f. Documentación disponible (¿Se puso a disposición de la sociedad civil documentación sobre los debates y los resultados?)	0 = no 1 = sí, hasta cierto punto 2 = sí, totalmente	0
g. Revisión transparente de las recomendaciones (¿Se examinaron de forma transparente las recomendaciones y opiniones de la sociedad civil?)	0 = no 1 = sí, hasta cierto punto 2 = sí, totalmente	1
h. Proceso de evaluación y comentarios (¿Hubo un proceso de evaluación y retroalimentación sobre el procedimiento de participación?)	0 = no 1 = sí	0
	Puntuación máxima: 16	5

Criterio 5 Creación de capacidad

Indicadores	Puntuación	Puntuación final
a. Educación ambiental (¿Existen ofertas nacionales formales y no formales de educación medioambiental y climática?)	0 = no 1 = sí, unas pocas 2 = sí, muchas	1
b. Sensibilizar a los ciudadanos sobre sus derechos y posibilidades de participación (¿Está a disposición del público la información sobre derechos y posibilidades de participación?)	0 = no 1 = sí, hasta cierto punto 2 = sí, totalmente	1

c. Creación de capacidad para las OSC en materia de cambio climático, política climática, diálogo político, desarrollo organizativo, cooperación y creación de redes. (¿Existe capacitación en temas como el cambio climático, la política climática, el diálogo político, el desarrollo organizativo, la cooperación o la creación de redes para las OSC?)	0 = no 1 = sí, unas pocas 2 = sí, muchas	1
d. Creación de capacidades para los gobiernos en materia de participación e intervención de los actores (¿Existe un desarrollo de capacidades en materia de participación y compromiso de las partes interesadas para los gobiernos nacionales y los funcionarios estatales?)	0 = no 1 = sí, poca 2 = sí, mucha	1
	Puntuación máxima: 8	4
Puntuación total máxima	59	19

En 2015, Colombia y muchos otros países del mundo adoptaron el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global y sus impactos. Sin embargo, los compromisos nacionales actuales (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional - NDC, por sus siglas en inglés) son insuficientes para mantener el aumento de la temperatura media mundial este siglo por debajo de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. El tiempo se acaba y se necesitan cambios rápidos y de gran alcance en todos los sectores.

Las publicaciones "**Espacio cívico para la participación en la política climática**" pretenden analizar la situación y las condiciones de la participación relacionada con el clima y ejemplos concretos de elaboración participativa de políticas en diferentes países. Los análisis examinan cómo participa la sociedad civil nacional en los procesos políticos nacionales relacionados con el Acuerdo de París. Los estudios también identifican las barreras específicas de cada país para una participación significativa, efectiva y a largo plazo, y ofrecen recomendaciones para superar estas barreras. Este informe presenta los resultados del análisis de Colombia.

Otros análisis disponibles para

- **Argentina**
- **Chile**
- **Costa Rica**
- **Georgia**
- **Kazajstán**
- **República de Moldavia**
- **Ucrania**

Para más información, visite www.ufu.de/en/projekt/zivikli

Publicado por el Instituto Independiente de Cuestiones Medioambientales (UfU e.V.)



UfU Independent Institute
for Environmental Issues

www.ufu.de/en